



Poder Judicial de la Nación

LEGAJO DE APELACIÓN DE R. C. S.A. Y OTROS EN CAUSA N° 1229/2023, CARATULADA “R. C. S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415”.

CPE 1229/2023/6/CA3. Orden N° 35.219. Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11. Sala “A”.

Buenos Aires, de mayo de 2026.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la defensa de M. A. M. y de R. C. S.A. y por la defensa de T. D. C. Y. C. A. contra la resolución por la cual se dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de los nombrados y se dispuso trabar embargo sobre los bienes de cada uno de aquéllos hasta cubrir la suma de cuarenta y un millones de pesos (\$ 41.000.000).

Las presentaciones por la cuales las defensas de M. A. M. y de R. C. S.A., y de T. D. C. Y. C. A., informaron en los términos del art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida de fecha 10/10/2024, el Juzgado de la instancia anterior dictó los autos de procesamiento, sin prisión preventiva, de R. C. S.A., de M. A. M. y de T. D. C. Y. C. A. “... *por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito previsto por el artículo 303, inciso 1º, del Código Penal, en orden a los hechos que les fueron atribuidos al recibírseles declaración indagatoria (artículos 306, 307, 308 y 310 del C.P.P.N. y artículo 45 del Código Penal) ...*”.

En aquella ocasión, además, se trabó un embargo sobre los bienes de los nombrados hasta cubrir la suma de cuarenta y un millones de pesos (\$ 41.000.000).

Para decidir de la manera indicada, el señor juez “a quo” sostuvo que “...*el ilícito investigado comienza a partir de la presentación de la facturación en principio apócrifa y en consecuencia el intento de*



burla al servicio aduanero resultaría ser el hecho ilícito previo al delito de lavado de activos que se habría detectado... ”.

En ese sentido, para fundamentar en qué habría consistido la supuesta adulteración de la documentación, el magistrado argumentó que *“...tanto la factura presentada en las entidades bancarias como aquellas presentadas -por las mismas operaciones- ante el organismo aduanero poseen diversas inconsistencias en su formato... ”*, puntualizando que al compararlas se detectaron *“...diversas irregularidades (sea en su formato, en la diferencia de fechas, consignándose en algunos casos distintos proveedores a los exportadores de la mercadería cuyo pago se intentó justificar)... ”*.

A partir de lo referido, concluyó que dicha maniobra implicó *“...un engaño al organismo recaudador (AFIP) en relación a la verdadera existencia de tales operaciones con el fin de obtener un beneficio del tipo de cambio aplicado para realizar las mencionadas transferencias por parte de los ordenantes, conducta que podría resultar encuadrada en la figura prevista por el art. 864 del Código Aduanero... ”*.

Asimismo, desestimó los descargos efectuados por las defensas de los imputados que sostenían la licitud del dinero utilizado, respecto de lo cual expresó que si bien *“...C. A. indica que la firma R. posee fondos suficientes para justificar las operaciones mencionadas, sin que ello modifique el criterio aquí expuesto, en cuanto mediante la presentación de facturación que sería apócrifa se intentó burla[r] al organismo aduanero y así extraer del país las divisas a un cambio más favorable... ”*.

En la misma línea, el magistrado de la instancia anterior concluyó que *“...Las circunstancias descriptas a lo largo de la presente relacionada con las operaciones efectuadas por los imputados conforman esos indicios que permiten acreditar la transferencia de divisas con fondos presumiblemente de origen ilícito simulando operaciones de importación de mercadería... ”*.

Sobre la base de ese presunto ilícito aduanero previo, por la resolución recurrida se consideró configurada la maniobra de lavado de activos afirmando que *“...es posible tener por acreditado, al menos con el grado de certeza requerido para esta etapa procesal, que R. C. S.A., M. A. M. y T. D. C. Y. C. A. llevaron a cabo una serie de maniobras ardidosas con el objeto de obtener autorizaciones oficiales para la conversión de fondos ilícitos en moneda nacional al tipo de cambio oficial y así luego posibilitar*





Poder Judicial de la Nación

el posterior giro de las divisas al exterior...” y que “...es a partir de la valoración conjunta de los elementos de prueba señalados en la presente que es posible tener por acreditadas las maniobras constitutivas del delito previsto por el artículo 303, inciso 1º del Código Penal...”.

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto y en la ocasión de informar en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa de R. C. S.A. y de M. A. M. se agravió por considerar que no se encuentran reunidos los elementos requeridos en esta etapa para tener por acreditado que los hechos denunciados puedan ser considerados como delitos, aclarando que no se recurría el embargo dispuesto respecto de sus defendidos por cuanto la revocatoria del mismo debía eventualmente proceder como consecuencia de constituir una medida derivada del procesamiento de aquéllos.

En primer lugar, la defensa indicó que lo expuesto en la resolución recurrida *“...permite asociar un razonamiento del Juzgado actuante en favor de sostener que R. habría incurrido en alguno de los ilícitos consagrados en el CA a través de operaciones de importación ‘simuladas’. Ello, en el contexto de las mismas destinaciones de comercio exterior que sirvieron de antecedente a efectos de establecer la adquisición de divisas en el mercado de cambios y su posterior transferencia a otros países...”*, consideraciones con las cuales la defensa manifestó su total disconformidad.

Señaló que todo lo referente a las importaciones atribuidas a R. C. S.A. había sido judicializado oportunamente, pero que luego no se efectuó ninguna imputación con relación a la comisión de un ilícito aduanero concursado con el de lavado de activos y los acusadores no avanzaron en la hipótesis del delito de contrabando, lo que podía establecerse a partir de la lectura del dictamen en el que el acusador público solicitó la declaración indagatoria de sus asistidos únicamente en función del delito previsto en el art. 303 del C.P. Expresó que dicho proceder por parte de la Fiscalía interviniente no fue casual, sino producto de no haberse evidenciado ninguna irregularidad en torno a la documental y la declaración comprometida relacionadas con las operaciones de importación contra las cuales se solicitó la adquisición de las divisas.

Por su parte, la defensa expresó que R. C. S.A. existe efectivamente, que se dedica al rubro que se corresponde con los efectos que fueron importados, que la mercadería se adquirió y fue objeto de control



aduanero sin merecer impugnaciones, que las facturas presentadas en los despachos son verdaderas y legítimas, y que los montos abonados al exterior fueron efectivamente los exteriorizados en las destinaciones de importación.

Aclaró que si alguna diferencia se manifiesta entre las facturas agregadas a los despachos de importación y las presentadas ante las entidades bancarias a cargo de las transferencias cuestionadas, tal circunstancia no permite sostener que aquéllas resulten apócrifas, y agregó que M. A. M. en su declaración indagatoria explicó los motivos por los que dichos documentos son diferentes, indicando textualmente que: *“...una vez arribada la mercadería al puerto aportábamos una factura confeccionada por el proveedor y remitida por este o por el intermediario interviniente a los fines de poder llevar a cabo los trámites necesarios para nacionalizar la misma [...] Era en este contexto que procedíamos a aportar una segunda factura, también confeccionada por el proveedor y remitida por este o por el intermediario [...] a efectos de que desde Buenos Aires pudiese determinarse y autorizarse la transferencia de fondos en concepto del pago de las mercaderías previamente ingresadas, consignándose los datos del beneficiario y de la cuenta bancaria a los que el exportador exigía dirigir dicho pago...”*.

A su vez la defensa señaló que en lo referente al delito de lavado de activos lo que debe primar es si los fondos empleados, inyectados en el sistema bancario y cambiario, tienen origen lícito o no.

Al respecto, expuso que los fondos empleados para la compra de dólares provienen de las ventas en plaza de mercadería efectuadas por R. C. S.A., por lo que aquellos poseen un origen justificado y lícito, destacando en este sentido el volumen de negocios de la sociedad, la presentación de declaraciones juradas y de cumplimientos impositivos, junto con la consistencia y la solidez patrimonial de sus administradores. En esta línea, reprochó que por la resolución recurrida se presumiera el origen ilícito de los fondos, omitiendo valorar la prueba patrimonial y contable incorporada al expediente que demostraría la capacidad económica de la firma.

De esta manera la defensa concluyó que debía descartarse en el caso la existencia de un ilícito precedente, postuló la atipicidad de la conducta bajo la óptica de lo normado en el art. 303 del C.P., y solicitó que se revoque el auto de procesamiento dictado respecto de M. A. M. y de R. C. S.A.





Poder Judicial de la Nación

3º) Que, por el recurso de apelación interpuesto y en la ocasión de informar en la oportunidad establecida por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa de T. D. C. Y. C. A. se agravió por considerar que en el caso se verifica una afectación del derecho de defensa y una valoración arbitraria del descargo de su defendida.

Al respecto indicó que las manifestaciones vertidas por C. A., que son de manera cierta e incisiva conducentes para la resolución de su situación procesal, han sido ignoradas, privándola así de practicar su básico y constitucional derecho de defensa en juicio previsto por el art. 18 de la C.N., a través del dictado de una resolución carente de motivación y, consecuentemente, arbitraria.

Por otra parte, la defensa expresó que, al dictar el auto de mérito en los términos del art. 306 del C.P.P.N., el “*a quo*” invirtió la carga de la prueba lo que provocó una violación al principio de inocencia. En este sentido, destacó que en la resolución recurrida se sostuvo que: “*...Por su parte C. A. no indicó cual de aquellas facturas presentadas en el servicio aduanero o las entidades bancarias resultaba ser la facturación real y tampoco fueron aportadas constancias que acrediten -más allá de las facturas presuntamente apócrifas- la voluntad del proveedor del exterior en que los pagos se hagan a distintos beneficiarios...*”.

Sobre tales consideraciones, la defensa expuso que no hay documentación real y facturación falsa y que, si la hubiere, establecer cuál es apócrifa y por qué es falsa le corresponde a quien acusa, y no a quien es acusado. Asimismo, tildó de arbitraria y tendenciosa la interpretación realizada por el magistrado respecto a la relación con la firma importadora y exportadora V. LTDA., omitiendo considerar las circunstancias alegadas que daban cuenta de que se trataba de un vínculo netamente comercial en el que dicha firma actuaba como intermediario y aval ante los proveedores orientales.

Por su parte, el recurrente invocó la inexistencia de un ilícito previo para la configuración del delito de lavado de activos, toda vez que a su criterio R. C. S.A. fue la real importadora y destinataria de la mercadería; los pagos resultan imputables a las operaciones de importación denunciadas, el dinero utilizado fue bancarizado y, por ende, fácilmente rastreable, a la vez que los fondos fueron obtenidos de las ganancias de la empresa por la explotación de su objeto social, por lo que tienen un origen lícito. En esta línea, la defensa se agravió expresamente de la omisión del juzgado de



llevar a cabo la actividad probatoria solicitada en su descargo, destacando que se ignoraron los balances contables aportados para probar la capacidad patrimonial de la firma, y que se omitió librar los exhortos internacionales a los proveedores en China a fin de acreditar la dinámica de la operatoria comercial.

La defensa también señaló que, sin perjuicio de que el auto de procesamiento debe ser revocado y, consecuentemente, también el embargo dispuesto, para el dictado de dicha medida cautelar el Tribunal de la instancia anterior manifestó en abstracto la necesidad de asegurar una eventual multa sin concretar acto alguno que diera lugar al temor de no poder reclamarla, lo que a su criterio impide la imposición de tan altos montos y torna arbitraria a dicha decisión.

4º) Que, dado que constituyen cuestionamientos que, de prosperar, tornarían innecesario ingresar al examen de los agravios relacionados con el fondo del asunto, corresponde tratar con antelación a aquellas cuestiones, la argumentación de la defensa de C. A. tendiente a descalificar el auto de procesamiento mencionado por el considerando 1º de la presente como acto jurisdiccional válido por cuanto, a su criterio, carece de motivación, resulta arbitrario, a la vez que se produjo una inversión de la carga de la prueba vulnerándose el principio de inocencia.

En este sentido, en primer lugar, corresponde expresar que para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de motivación, o resultar contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas. Contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, estos defectos no se advierten en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido.

Por lo demás, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2º del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00, 533/07, 602/15, 72/16, CPE 235/2018/8CA3, res. del 26/3/2019, Reg. Interno N° 170/19, CPE 426/2017/2/CA1, res. del





Poder Judicial de la Nación

17/2/2020, Reg. Interno N° 55/20 y CPE 613/2019/CA1, res. del 08/09/2020, Reg. Interno N° 381/20, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

5º) Que, asimismo, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se dispone por el art. 123 del C.P.P.N., por el art. 308 del mismo cuerpo legal se establecen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento (confr. Reg. N° 379/11, 63/12, 712/13, CPE 61011858/2009/3/CA1, res. del 13/07/2018, Reg. Interno N° 572/18, CPE 235/2018/8CA3, res. del 26/3/2019, Reg. Interno N° 170/19 y CPE 426/2017/2/CA1, res. del 17/2/2020, Reg. Interno N° 55/20, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara, y CFP 9881/2016/71/CA27, res. del 18/03/2020, Reg. Interno N° 102/20 de esta Sala “A”).

Por lo tanto, es útil poner de relieve que, por el pronunciamiento cuestionado, se consignaron los datos de los imputados, se relató lo manifestado por éstos al prestar declaración indagatoria, se expresaron los motivos por los cuales se dictó la decisión impugnada, se detalló la prueba colectada, se efectuó una descripción detallada de los hechos investigados y de la intervención que habrían tenido los imputados, se indicó la calificación legal “*prima facie*” atribuible a los hechos en cuestión, con cita de las disposiciones legales que se consideraron aplicables, y se analizó al grado de participación que se les atribuye. En consecuencia, corresponde establecer que toda vez que por la resolución recurrida se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N. el agravio de la defensa de C. A. relativo a la falta de fundamentación suficiente y arbitrariedad de aquélla no tendrá una recepción favorable.

6º) Que, por lo tanto, se advierte que la carencia de una motivación adecuada, aludida por la defensa de C. A., sólo constituye una discrepancia de aquella parte con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto de procesamiento examinado.

7º) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados a



la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado del auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos -como el que se presenta en el *sub lite*- en los cuales por el auto impugnado se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr. Regs. Nos. 923/03, 602/15, 72/16, CPE 235/2018/8/CA3, res. del 26/3/2019, Reg. Interno N° 170/19 y CPE 426/2017/2/CA1, res. del 17/2/2020, Reg. Interno N° 55/20, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

En consecuencia, los agravios vinculados con la supuesta falta de fundamentación de la resolución recurrida y de violación al principio de inocencia efectuados por la defensa de C. A. no pueden tener una recepción favorable.

8º) Que, asimismo, corresponde expresar que, en oportunidades reiteradas, este Tribunal ha establecido que “...por la normativa procesal vigente, en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a valorar todos y cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a pronunciarse sobre todos los descargos efectuados por el imputado, ni a producir todas las medidas de prueba solicitadas por aquél, sino sólo las que estimara pertinentes a fin de ‘...comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 193 del C.P.P.N.)’ (confr. Regs. Nos. 663/01, 664/01 y 163/06, de esta Sala ‘B’). Asimismo, si ‘... por el desarrollo posterior de la instrucción se favoreciera la situación de los imputados, por la ley de rito se prevé la posibilidad de revocar de oficio, o de reformar, el auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.)...’” (confr. Regs. Nos. 414/01, 387/04, 443/11, 369/16 y 313/17, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1002/2016/36/1/CA67, res. del 23/6/2023, Reg. Interno N° 255/23, de esta Sala “A”).

9º) Que, con relación a la cuestión de fondo, por el examen de las constancias incorporadas al legajo principal al que corresponde el presente incidente se advierte que, contrariamente a lo decidido por el juzgado “*a quo*” en fecha 10/10/2024, los elementos de prueba incorporados a las actuaciones no configuran hasta el momento un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el





Poder Judicial de la Nación

art. 306 del C.P.P.N., la estimación provisoria que se efectuó por la resolución apelada, relativa a la acreditación de los hechos ilícitos investigados.

10º) Que, por el art. 303, inc. 1, del Código Penal, se reprime a quien “...convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquirieran la apariencia de un origen lícito...”.

11º) Que, el delito de legitimación de activos o de lavado de activos previsto en su figura base por el art. 303 del Código Penal, reclama en su estructura típica que los bienes que sean puestos en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de un origen lícito, provengan de un ilícito penal.

Consecuentemente, aquel delito previo debe encontrarse demostrado en el proceso en el que se investiga una supuesta legitimación de activos, al menos de manera indiciaria, conforme prueba razonable y en principio inequívoca (confr. CPE 685/2019/5/CA3, res. del 22/7/2020, Reg. Interno N° 294/20 y CPE 296/2020/3/CA1, res. del 27/2/2023, Reg. Interno N° 53/23, de la Sala “B” de esta Cámara).

En este sentido, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por el pronunciamiento del Reg. N° 1661/23.4, recaído en la causa FRE 175/2018/TO1/CFC19, del 27/11/23, expresó: “...el hecho ilícito precedente del que proviene el bien objeto de blanqueo constituye un elemento normativo del tipo de la figura legal en trato. El tribunal encargado del juzgamiento del lavado debe determinar si, con las pruebas producidas, puede tenerse por acreditado dicho ilícito penal. Esta Sala IV ha señalado que el grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. **Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico (C.F.C.P.,**



Sala IV, ‘Bestani, Fabián Humberto y otros s/recurso de casación’, reg. Nro. 33/21.4, rta. El 05/02/2021 y sus citas)...” (el resaltado es de la presente).

Por el fallo del Reg. N° 8622 recaído en la causa N° 6754 “ORENTRAJCH, Pedro y otro s/recurso de casación”, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 21/03/2006, el Tribunal de mención expresó: “...La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo. **Obviamente, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades criminales graves, o con personas o grupos relacionados con las mismas, que como tendremos ocasión de comprobar es uno de los presupuestos básicos para la aplicación de este tipo penal, no será necesario que supere el plano indiciarlo, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría inevitablemente a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito precedente...**” (el resaltado es de la presente).

Por su parte, por doctrina en la materia se ha expresado: “...hemos concluido que el LD [lavado de activos] debe ser entendido y juzgado como un delito autónomo de los delitos precedentes. Esto supone, entre otras cosas, que la investigación, procesamiento o condena del delito precedente no es un requisito para poder reprimir el LD. **Sin embargo, resulta evidente que el juez o fiscal con jurisdicción para investigar el delito de LD [lavado de dinero] debe demostrar, con solvencia y suficiencia, que los activos/bienes sometidos al proceso de reciclado proceden realmente de un ‘ilícito penal’.** El grado de claridad, neutralidad, suficiencia de la prueba que se reúna exige, indefectiblemente, que la procedencia criminal de los bienes sometidos al blanqueo no se sostenga en base a meras presunciones, hechos históricos o conjeturas, que violenten sensiblemente los presupuestos a gozar de la ‘presunción de inocencia’...”. (confr. “Lavado de dinero”, Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso directores, ed. AD HOC, Buenos Aires, 2018, artículo: “El delito de lavado de dinero y su difícil prueba”, Roberto Durrieu Figueroa, pag. 149/166, el resaltado es de la presente).





Poder Judicial de la Nación

En el mismo sentido: “...aunque es cierto que, desde un punto de vista material, la tipicidad se satisface con la comprobación de que los bienes provienen de cualquier ilícito penal, desde un punto de vista procesal penal, respetuoso del derecho de defensa, con la prueba producida sí debería ser posible indicar de qué delito o, al menos, actividad ilícita genérica provendrían los bienes...” (confr. Fernando J. Córdoba, “Delito de lavado de dinero”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2016, pág. 156).

Por otro lado, en cuanto a la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, se ha expresado por la doctrina: “...uno de los tópicos más complejos dentro de la teoría de la prueba en el proceso penal es, sin duda, el referido a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, donde determinados hechos indirectos que se dan por probados se enlazan a una conclusión unívoca y necesaria que acredita algún aspecto del objeto material del proceso penal en ciernes...” (confr. “Tratado de Lavado de activos y financiación del terrorismo”, directores Humberto J. Bertazza y Francisco J. D’Albora (h). La Ley, Buenos Aires, 2012, artículo: “La investigación y prueba del lavado de activos”, Raúl R. Saccani, pág. 131).

De lo reseñado se concluye que, de conformidad con lo establecido por el art. 303 del Código Penal, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina se ha establecido que, para efectuar una imputación por lavado de activos, resulta imprescindible algún grado de verificación de la existencia de un hecho precedente ilícito, y por lo tanto típico y antijurídico.

Consecuentemente se requiere la verificación de la existencia de un hecho ilícito precedente, comprobada “*prima facie*” mediante las pruebas a las cuales se hace referencia por nuestro código de formas y el sentido común, la experiencia y la sana crítica, lo cual no puede ser suplido por meras conjeturas o creencias o estimaciones no comprobadas del juzgador.

12º) Que, en el caso de autos, si bien el representante del Ministerio Público Fiscal, al solicitar que se recibieran las declaraciones indagatorias, sostuvo que la maniobra investigada habría tenido la intención de “...girar indebidamente al exterior elevados montos que egresaron del país con presunto origen espurio...”, y en similar sentido el señor juez “*a quo*”, al dictar el auto de procesamiento recurrido, afirmó que las circunstancias del caso conformaban “...indicios que permiten acreditar la



transferencia de divisas con fondos presumiblemente de origen ilícito simulando operaciones de importación de mercadería...”, asumiendo que el accionar estaba orientado a lograr la conversión de fondos ilícitos en moneda nacional a divisas y así posibilitar su posterior giro al exterior; lo cierto es que, por la compulsa de las actuaciones principales se advierte que hasta el momento no se ha determinado cuál es la procedencia de los fondos en pesos aplicados por la firma R. C. S.A. para la adquisición de las divisas y el posterior giro de las mismas al exterior, y por lo tanto, no se puede afirmar con certeza suficiente, su origen ilícito requerido por la figura del art. 303 del Código Penal.

En este contexto, se advierte que por la resolución recurrida se tuvo por acreditado el presunto origen ilícito del dinero asumiendo que el mismo sería producto del delito de contrabando, sobre la base de las diferencias advertidas entre la facturación presentada ante la autoridad aduanera en el marco de las operaciones de importación en relación a las cuales se pretendería efectuar las remesas observadas, y aquélla aportada ante las entidades bancarias para gestionar esos giros de divisas supuestamente correspondientes a dichas operaciones.

Sin embargo, dicho ilícito aduanero supuesto no fue objeto de requerimiento alguno por el fiscal, de investigación o de acreditación previa suficiente ni en estos autos principales ni en otros, hasta el momento. El magistrado “*a quo*” aclaró que “*...posteriormente la fiscalía enmarcó típicamente las conductas en las previsiones del artículo 303, inciso 1º, Código Penal...*”. Así las cosas, no se explica por la decisión en crisis, ni surge de las constancias del expediente, de qué manera esas diferencias documentales justificarían la hipótesis de la ilicitud del origen de los fondos en moneda nacional empleados por la firma.

Sin perjuicio de lo expuesto, los hechos investigados podrían ameritar un examen desde la óptica del delito de contrabando, aspecto que, no ha sido investigado y que eventualmente deberá ser evaluado por el magistrado de la instancia anterior al continuar con la pesquisa, a cuyo fin corresponde encomendarle que profundice la investigación con relación a dicha hipótesis delictiva.

13º) Que, en esa situación procesal, no habiendo sido demostrado siquiera indiciariamente cuál sería el delito precedente por parte de los responsables de R. C. S.A., no se advierte acreditada, al menos por el momento, la existencia de uno de los elementos típicos requeridos





Poder Judicial de la Nación

normativamente para la configuración del delito de lavado de activos de origen ilícito, previsto por el art. 303, inciso 1, del Código Penal.

En efecto, a partir de lo establecido por los considerandos anteriores, las transferencias de divisas al exterior realizadas, no bastan por sí solas para sustentar la tipificación de los hechos investigados como maniobras de lavado de activos, cuando no se ha demostrado en la causa, por el momento, que el dinero en moneda nacional utilizado para adquirir dichas divisas resulte producto de un ilícito.

A lo expresado, se suma que los recurrentes se agravian expresamente de la omisión por parte del juzgado de la instancia anterior de valorar la prueba documental, contable y patrimonial incorporada al expediente que, según afirman, permitiría tener por acreditado el origen lícito y justificado de los fondos. En similar sentido, las defensas se agraviaron expresamente de que el magistrado instructor no hiciera lugar a las medidas de prueba que solicitaron oportunamente, orientadas a librar exhortos internacionales con el objeto de demostrar, conforme a su hipótesis, la dinámica comercial y la legitimidad de la operatoria llevada a cabo con los proveedores del exterior.

14º) Que, por todo lo expresado, corresponde concluir que los autos de procesamiento dictados por el punto dispositivo I de la resolución recurrida respecto de R. C. S.A., de M. A. M. y de T. D. C. Y. C. A. resultan, cuanto menos, prematuros y no se encuentran ajustados a derecho ni a las constancias recabadas en el expediente, por lo que corresponde revocar los mismos y, consecuentemente, también debe ser revocado el punto dispositivo II de la decisión aludida, por el cual se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de cada uno de los nombrados hasta cubrir la suma de cuarenta y un millones de pesos (\$ 41.000.000), que resulta consecuencia de aquéllos.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. REVOCAR la resolución recurrida.

II. ENCOMENDAR al juzgado “*a quo*” en los términos que surgen del considerando 12º “*in fine*” de la presente.

III. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de



Justicia de la Nación y devuélvase al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. N° 11/2025 de Superintendencia de esta Cámara).

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

MARTÍN LIMERES
PROSECRETARIO DE CAMARA

